

EDUCACIÓN SEGUNDA HUELGA EN UN MES

LOS CAMPUS SE PLANTAN CONTRA WERT

La protesta convocada por estudiantes y profesores contra el decreto de grados del Gobierno paraliza las universidades españolas

MARÍA SEGUROLA / O. R. SANMARTÍN
MADRID

Por segunda vez en un mes, los universitarios españoles y sus profesores hicieron ayer huelga en la mayoría de los campus españoles. El motivo oficial era protestar por el decreto aprobado en enero que permite reducir las carreras de cuatro a tres años y que, según los convocantes, encarecerá los estudios y provocará despidos. El motivo oficioso era expresar el hastío generalizado que existe hacia la política del ministro José Ignacio Wert.

«No vamos a clase en protesta contra la situación general», resumía un profesor de la Universidad de Alicante. «Nuestra matrícula cuesta casi 2.000 euros», apuntaban por la tarde, en la manifestación de Madrid, estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma. «Con cada Gobierno el plan va cambiando y cada vez es peor», se quejaban, a su lado, varios alumnos de Derecho de la Complutense. «Estoy contra la Lomce, las reválidas son una forma

de robarnos el futuro», añadía un chaval de 2º de Bachillerato.

La huelga, por tanto, iba más allá del polémico decreto de grados –la llamada «contrarreforma universitaria»– y suponía una enmienda a la totalidad contra Wert. Porque si algo ha conseguido el ministro es poner de acuerdo a todos (incluidos los del PP) en su contra. En las manifesta-

ciones de una treintena de ciudades marcharon los adolescentes junto a sus padres y sus docentes. Uno de los lemas de la marcha de Madrid era, de hecho, «Profesores y estudiantes, unidos y adelante», pero también se oyó uno muy habitual en la más de media docena de huelgas de esta legislatura: «Wert, vete ya».

Tanto unió el ministro ayer que el sindicato de funcionarios CSIF logró ponerse de acuerdo con colectivos ideológicamente alejados a él, como el Sindicato de Estudiantes, CCOO, UGT, Estudiantes en Movimiento o la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest). Los convocantes hicieron paraguas bajo estas siglas, a las que también respaldaban la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), el PSOE, IU (el poeta Luis García Montero dijo que «sin educación pública no existe democracia»), Ecologistas en Acción o los trabajadores de Coca-Cola.

Los convocantes dijeron que la huelga (*trending topic* en Twitter todo el día) fue seguida por «el 85%» de los alrededor de 147.000 trabajadores de las universidades públicas,

así como por «el 85%» de los más de 1.300.000 universitarios y «el 90%» de los 1.500.000 estudiantes de Bachillerato y FP.

En contra de lo que ha hecho en otras ocasiones, el Ministerio de Educación no dio ningún porcentaje de seguimiento y fuentes de este departamento hablaron de «normalidad absoluta en todas las comunidades autónomas, salvo por los incidentes vandálicos» de la Autónoma de Madrid. Esta huelga, eso sí, fue más secundada que la del 25 y el 26 de febrero, sobre todo porque también la organizaban los profesores. Pero la marcha de Madrid fue menos numerosa que otras veces.

Hubo alguna discrepancia organizativa. Por ejemplo, los docentes de Madrid hicieron huelga en todas las etapas educativas, pero en el resto de España sólo pararon en las universidades. Además, en la capital confluyeron dos marchas con dos recorridos distintos: la de los convocantes oficiales y la de la plataforma que engloba las asambleas de los campus madrileños, Toma la Facultad.

Los paros más «masivos» se dieron en Madrid y en Andalucía. En algunos centros, como en la Universidad de Cantabria, hubo encierros desde la noche anterior. En Cataluña, sin embargo, la convocatoria fue muy poco respaldada.

La jornada universitaria se paralizó, bien por la no asistencia a clase, bien porque las barricadas, los contenedores quemados, los cortes de tráfico, los piquetes y las cerraduras selladas cortaron el paso a los que querían asistir a clase. Algunos intentaban colarse. «Estamos de acuerdo con los motivos de la protesta, pero creemos que parar la educación no es la forma de quejarse», lamentaba un estudiante de Logopedia en el campus de Somosaguas.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DETECTA «SOBREDIMENSIONAMIENTO» DOCENTE

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, relató ayer en el Congreso que las universidades públicas españolas tienen una deuda de 620 millones de euros y que hay un «cierto sobredimensionamiento» del profesorado en relación con el número de alumnos existente. Dijo haber apreciado en «muchas de las ramas» una carga docente inferior, de media, a los 24 créditos anuales. Su informe de fiscalización correspondiente a 2012 destaca también el exceso de plazas ofertadas, «especialmente significativo» en los máster, según informa Europa Press.